

Revista Derecho y Ciencias Sociales. Abril 2011. N°4. Pgs. 225-246. ISSN 1852-2971
Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJyS.UNLP

A una década del *default* de la deuda externa:

Una mirada crítica sobre la gestión del FMI de la crisis del 2001.

Alejandro Gabriel Manzo*

Resumen.

Este artículo sintetiza las principales críticas que el informe de la “Oficina de Evaluación Independiente” efectuó a la manera en la cual el FMI gestionó la crisis del 2001 en Argentina. Previo a ello, delinea una serie de categorías teóricas necesarias para entender el poder y la dinámica de esta institución en la era de la globalización neoliberal, y reconstruye su relación con los gobiernos nacionales anteriores al *default* 2001. Consideramos que este trabajo aporta elementos que permiten comprender el porqué de la tensa relación actual entre las autoridades argentinas y las del Fondo.

Abstract.

This article presents the main critics that the “Independent Evaluation Office” states to the way that the IMF management the Argentinean crisis of 2001. Before that, shows a set of theoretical categories appropriated to understand the power and dynamic of this institution in the neoliberal globalization era, and reconstruct his relationship whit the national governments previous to the 2001 default. We believe that this article give some elements that can help to understand the actual conflictual relationship between the national authorities and the IMF.

* Magíster del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Oñati España, y docente, “auxiliar de primera”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Correo electrónico: alemanzzo@hotmail.com.

A una década del *default* de la deuda externa:

Una mirada crítica sobre la gestión del FMI de la crisis del 2001.

Alejandro Gabriel Manzo

1. Introducción.

La crisis del 2001, calificada por muchos observadores como la peor de la historia Argentina, constituyó un verdadero punto de inflexión en la vida política y económica de nuestro país. A una década de producido el *default* de la deuda externa, el más cuantioso hasta entonces registrado, sus efectos todavía siguen operando y definiendo las prácticas de los agentes actuales. Volver, como pretende este trabajo, sobre el análisis de los acontecimientos que la desencadenaron no constituye un mero ejercicio de reflexión histórica sino un intento por comprender rasgos de la realidad presente.

Las características que rodearon a la crisis del 2001 la convirtieron en un caso paradigmático a escala global en lo que a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los países emergentes se refiere. Esto es así, porque esta institución desempeñó un papel ciertamente especial durante la gestión de la crisis y asimismo, estableció una relación única con las autoridades Argentinas. Al menos las siguientes afirmaciones permiten corroborar lo señalado (Mussa, 2002:3; Takagi , 2004: 14, 39 y 105 ; Rodríguez 2004:2).

En primer lugar, el modelo de convertibilidad era promocionado a finales de los 90 por las propias autoridades del FMI como el mejor modelo económico del planeta. En segundo lugar, a diferencia de lo ocurrido en Corea e Indonesia, países en los que el Fondo no había tenido participación activa durante los años previos a las crisis, en Argentina existían programas financieros sucesivos desde 1991. En tercer lugar, las autoridades nacionales suscribieron con el FMI un acuerdo *stand-by* en marzo del 2000. Desde entonces y hasta diciembre del 2001 esta institución concluyó 4 consultas de revisión y amplió en cada una de ellas su nivel de financiamiento al país convirtiéndolo en su 3° deudor a nivel mundial. En cuarto lugar, los recursos del FMI se destinaron mayormente a apoyar el régimen de convertibilidad, al cual desde hacía mucho tiempo el organismo consideraba esencial para la estabilidad de los precios y fundamentalmente viable. En quinto lugar, el Directorio Ejecutivo de la institución participó y siguió detenidamente la situación de nuestro país. Además de las reuniones formales para aprobar las revisiones que se iban realizando al programa original, entre diciembre de 2000 y enero de 2002, el Directorio se reunió informalmente 16 veces para analizar el caso argentino. En sexto lugar, en la segunda mitad

de 1999, el FMI sentó las bases para la gestión de la crisis estableciendo un “grupo de trabajo para Argentina”. A fines de 2000, este grupo comenzó a elevar “informes diarios” sobre los indicadores económicos y financieros de nuestro país. En séptimo lugar, y tras una serie de medidas de emergencia, el gobierno nacional quebró relación con el FMI e inició un sorprendente proceso de recuperación económica sin su apoyo y en oposición a sus prescripciones políticas.

Producido el default, y dadas las características señaladas, los principales centros académicos del mundo occidental se pronunciaron sobre lo sucedido: desde el congreso de los EEUU que creó una comisión especial a estos efectos (Committee on Financial Services, 2002), pasando por los *think tanks* más reconocidos (vgr. *Foreign Affairs* (Feldstein, 2002) y llegando hasta, por ejemplo, Stiglitz (2002) (ex jefe del departamento de economía del BM), Edwards (2002) (ex jefe del departamento de economía del BM), Guillermo Perry (ex jefe del departamento de economía para América Latina del BM), Ricardo Hausmann (ex jefe del departamento de economía del BID), Mark Allen (del staff del FMI), Onno de Beaufort Wijnholds (del Consejo del FMI)¹, Mussa (2002) (ex jefe del departamento de investigación del FMI) y Anne Krueger (2002) (ex primera diputada del director gerente del FMI).

El propio Fondo encargó a su “Oficina de Evaluación Independiente” (OEI) que realizase un análisis del papel que había desempeñado en Argentina desde 1991 al 2001. Luego de dos años de arduo trabajo, que incluyó la recolección de un cúmulo relevante de investigaciones sobre la temática y decenas de entrevistas a los principales actores – nacionales e internacionales- involucrados en el período señalado, la OEI presentó su informe final -Takagi (2004)-.

Este artículo pretende sintetizar las principales críticas que este informe efectuó a la manera en la que el FMI gestionó la crisis del 2001 en Argentina. Previo a ello, delinea una serie de categorías teóricas necesarias para entender el poder y la dinámica de esta institución en la era de la globalización neoliberal, y reconstruye su relación con los gobiernos nacionales anteriores al *default* 2001. Consideramos que este trabajo aporta elementos que permiten comprender el porqué de la tensa relación actual entre las autoridades argentinas y las del Fondo.

¹ Guillermo Perry, Ricardo Hausmann, Mark Allen, Onno de Beaufort Wijnholds escribieron capítulos sobre la crisis del 2001 en el libro coordinado por Teunissen y Akkerman (2003) y titulado *The Crisis That Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation*.

2. El FMI: elementos analíticos para comprender su importancia en la era de la globalización neoliberal.

Sin lugar a dudas, el FMI es una de las instituciones más reconocida e importante de la era de la globalización. Es asociado, entre otras cuestiones, a un determinado tipo de modelo económico (vgr. el neoliberalismo) y a una excesiva ingerencia en la política interna de sus países miembros; ingerencia que llegaría en algunos casos a torcer hasta la propia voluntad de las autoridades nacionales. Si bien ello es relativamente cierto, la verdad es que no siempre fue así. La visibilidad y los poderes “reales-ficticios” que se le atribuyen, provienen de un largo proceso de construcción histórica vinculado a lo que se conoce como “el moderno proceso de globalización financiera”.

El surgimiento de esta organización se retrotrae al acuerdo de *Bretton Woods* de 1944. Como bien explica Boughton (2001:1), “el hombre que diseñó el marco teórico del sistema de Bretton Woods, New Hampshire, en 1944 previó al Fondo como una institución independiente y objetiva -una fuerza esencialmente automática- sujeta a una amplia gama de restricciones políticas y límites predeterminados por sus recursos financieros. Por las siguientes dos décadas, el rol del Fondo fue esporádico y, desde una perspectiva global, menor...”.

Este rol “esporádico” y “menor” que el Fondo tuvo durante sus primeras décadas de existencia no obedeció únicamente a las restricciones impuestas por su propio diseño constitutivo sino también a las características que durante esos años poseyó el sistema financiero internacional. Heydebrand (2003) explica que la transnacionalización del flujo de capitales se detuvo tras la 1ª guerra mundial y que el nivel alcanzado por entonces no se retomó hasta finales de la década de los 80. El movimiento de divisas se encontró, en esos años, fuertemente regulado, centralizado y direccionado hacia el interior de los Estados nación.

Habría que esperar hasta la década de los 70 para que esta realidad cambiase. La globalización financiera, explica Frenkel (2003:95), es un proceso histórico que puede ser leído a partir de la relación dialéctica entre dos dimensiones analíticas. “En una, la globalización está representada por el creciente volumen de transacciones financieras a través de las fronteras. En la otra dimensión, es la secuencia de reformas institucionales y legales que se fueron realizando para liberalizar y des-regular movimientos internacionales

de capital y los sistemas financieros nacionales (...) los avances cuantitativos y los cambios institucionales y legales se incentivaron mutuamente...”.

Dos acontecimientos son comúnmente asociados a su desenvolvimiento inicial. El primero fue el abandono del acuerdo de *Bretton Woods*, el 15 de agosto de 1971, y la, consecuente, liberalización del tipo de cambio internacional. La segunda fue “la crisis de petróleo de 1973” que inyectó una cantidad de petrodólares en el sistema financiero internacional lo suficientemente elevada y abrupta como para modificar su estructura de manera radical.

A diferencia de lo que podría pensarse este inmenso flujo de divisas no se fragmentó en una cantidad innumerable de instituciones bancarias sino que, por el contrario, se concentró mayoritariamente en alrededor de 40 bancos comerciales con asiento matricial en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania Occidental y Japón (Escude y Cisneros, 2000)². Estos, durante aquellos años, se vincularon funcionalmente: a) entre sí, a través de contratos de participación conjunta y concertada en operaciones internacionales de créditos; b) con bancos más pequeños, de los que captaban recursos para establecer paquetes financieros con destino a gobiernos o grandes empresas; c) con los bancos que componen la reserva federal de los EEUU (los llamados *money center banks*) en la medida en que para operar a nivel internacional éstos debían tener una alta liquidez en dólares; liquidez que conseguían haciendo depósitos o abriendo líneas de créditos en dicho bancos; d) con los bancos centrales de sus respectivos países. En particular, con la reserva y el tesoro federal estadounidense encargados de determinar la política financiera que afecta al dólar y prestamistas de última instancia de los *money center banks* (Escude y Cisneros, 2000) e) con los “Bancos Multilaterales de Desarrollo” (BMD, vgr. BIS, BID, BM), en general, y con el FMI, en particular.

Durante los años 70, los BMD activamente promovieron la expansión e interconexión del mercado financiero a una escala global. Dos aspectos adquirieron fundamental importancia en este sentido. Fomentaron, de una parte, el reciclaje de los petrodólares desde las entidades centrales hacia los mercados emergentes y, de otra, la adopción de políticas de apertura económica a través de los denominados -en nuestra región- “experimentos de (neo-)liberalización del cono sur”.

Contrariamente a lo que estas organizaciones por entonces vaticinaron, los países periféricos y semi-periféricos del sistema mundial no fueron indefinidamente capaces de

² Se trata del texto del .Cap.55: Sección I: “Cambios en el sistema financiero internacional”:pg1.

absorber la inmensa cantidad de recursos líquidos que se les giraron. Una vez que, a finales de la década, la situación del mercado financiero internacional (*shock* Volker y 2° crisis del petróleo) se alteró, 17 Estados de Latinoamérica, 19 de África, 3 de Europa y 1 de Oceanía quedaron al borde del estado de cesación de pagos. (Harvey, 2007:106) Fue precisamente la “crisis de la deuda externa”, el contexto que catapultó al FMI al centro mismo del escenario mundial.

A principios de los 80 esta institución aparecía como la única institución transnacional lo suficientemente extendida como para dar respuesta a una problemática que había adquirido dimensiones globales. Ante la urgencia de la situación, los agentes que habían liderado el proceso de globalización financiera durante los 70 y que brevemente mencionamos (vgr. grandes bancos comerciales, BMD y bancos centrales de las potencias de occidente), cedieron competencias y se alinearon tras el FMI. Desde entonces todo país que pretendiese negociar su deuda con sus acreedores externos debía necesariamente alcanzar un Acuerdo previo con el Fondo.

Este acontecimiento, presentado aquí a la ligera, constituyó un verdadero punto de inflexión en la historia de la globalización financiera. Con anterioridad al estallido de la “crisis de la deuda” los agentes referidos, si bien vinculados funcionalmente, operaban de manera casi totalmente autónoma. Luego de ella, y a través de un complejo proceso de prueba y error que tuvo como caso emblema el “caso México”, éstos se organizaron y comenzaron a actuar de manera conjunta y coordinada. El poder económico y político se concentró como nunca antes.

En este nuevo escenario global, la posibilidad de un gobierno fuertemente endeudado y en un estado de extrema necesidad, de obtener créditos, detener la fuga de capitales y atraer nuevas inversiones a su territorio, sin haber alcanzado el referido Acuerdo, se hicieron prácticamente nulas. El FMI se convirtió, así, en la llave de entrada al mercado financiero internacional -a la globalización neoliberal- y sus Acuerdos, en un complejo dispositivo de control y disciplinamiento de sus Estados miembros.

El proceso de negociación entre el prestatario y el Fondo suele llevar meses. Durante éstos, los miembros de la institución tienen libre acceso a un cúmulo de información económica-social anteriormente resguardada por la soberanía del país endeudado. La realidad, las causas y soluciones de las crisis, se definen a partir del marco de referencia propio de la entidad financiera. Llegado a un compromiso, las autoridades de ambas partes firman una suerte de pre-acuerdo, llamado “Carta de Intención”, que luego debe ser aprobado por el

Consejo Directivo de la institución. En esta Carta, se delinean un “set de políticas” que el prestario debe cumplir a cambio de financiamiento (vgr. “préstamos por condicionalidades”).

Estas políticas, de contenido históricamente pro-mercado, a partir de la 2ª mitad de la década de los 70 adquirieron una impronta decididamente neoliberal. Con el tiempo, éstas se sistematizaron, se estandarizaron y conformaron una suerte de “recetario neoliberal” con destino a los países periféricos y semi-periféricos del sistema mundial. El “Consenso de Washington” de 1989 aparece como la manifestación más visible y acabada de este cometido. Es relevante, finalmente, advertir que el monitoreo de la política interna por parte del FMI no se detiene una vez cerrado el proceso de negociación, sino que se extiende a lo largo del tiempo y con el objetivo de advertir del cumplimiento efectivo de lo acordado. El Acuerdo, y consecuentemente el paquete financiero que a él se sujeta, puede en cualquier momento ser suspendido o revisado.

3. El Fondo Monetario Internacional en Argentina.

3.1 Antecedentes.

Durante la última dictadura militar la relación entre el FMI y las autoridades de facto fue eminentemente cooperativa. Esta cooperación se selló formalmente a través de la firma de un Acuerdo *stand by* el 16 de septiembre de 1977 por un monto de 159,5 millones de dólares (Boughton, 2001:327). El Fondo participó activamente en el diseño del plan económico activado por Martínez de Hoz-Adolfo Diz (presidente del BCRA) que, entre otras cuestiones, liberalizó el mercado financiero y abrió la economía local a la internacional de conformidad a las nuevas prescripciones de la escuela de Chicago de Milton Friedman, de quien el 2º de los mencionados, había sido alumno. Estas reformas transformaron la estructura económica vigente, situando a la valoración financiera como eje del nuevo patrón de acumulación. Se contrató, asimismo, a un funcionario de esta institución para que determinase la capacidad del Estado argentino de absorber los capitales líquidos provenientes del exterior. Razón por la cual, la justicia federal argentina³ corresponsabilizó a las autoridades del FMI de la ilegitimidad de la deuda externa contraída durante el proceso militar, al entender que las maniobras fraudulentas a partir de las cuales

³ Causa N° 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia"- Expte N° 7.723/98, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Secretaría N° 4.

se endeudó al gobierno nacional y a sus empresas en el período 1976-1983 “no podían pasar desapercibidas” en tanto ellas “supervisaban las negociaciones económicas”⁴

La relación cooperativa continuó luego de la derrota de Malvinas y del estallido de la crisis de la deuda externa. Tras una serie de idas y vueltas, el ministro de economía Wehbe acercó posiciones con el FMI, solicitándole que éste coordinara el proceso de negociación con los acreedores externos. El resultado fue la firma de un nuevo Acuerdo *stand by*, aprobado el 24 de enero de 1983, por un monto de 3.270 millones de dólares⁵. Es fundamental subrayar, que el FMI no sólo estaba al tanto del proceso de estatización de la multimillonaria deuda privada que se operacionalizó entre 1981 y 1983, sino que y en virtud del mencionado Acuerdo, él mismo debía aprobar los procedimientos a través de los cuales este proceso se instrumentalizó (Boughton, 2001:335). Se trata de un dato no menor, si se advierte que hacia fines de la dictadura militar, el peso de la deuda en el PBI era tal que comprometía seriamente la capacidad de pago del país, alteraba por sí sola el resto de las variables macroeconómicas y reducía, con ello, significativamente la capacidad de maniobra política del nuevo gobierno.

Este, ni bien asumido, pretendió juzgar la ilegitimidad de la deuda contraída por las autoridades de facto de tal manera de distinguir “lo pagable” de lo “no pagable”, activar un programa económico particularmente opuesto a los principios del neoliberalismo y acercar posiciones con los países de la región con el objetivo de máxima de conformar un frente de negociación conjunta de sus pasivos externos. Bajo estos presupuestos, la relación entre las autoridades nacionales, lideradas por el ministro de economía Grinspun, y las del FMI adquirió un carácter ciertamente confrontativo que tocó fondo en junio de 1984. La posición argentina fue, sin embargo, rápidamente doblegada y Alfonsín decidió reemplazar al ministro mencionado. El denominado “Plan Austral” de 1985 fue diseñado en estrecha cooperación con el staff técnico y político del FMI. Este, si bien no totalmente ortodoxo, incluía un fuerte ajuste estructural, un tipo de cambio destinado a la atracción de capitales internacionales y, en su segunda etapa, un extendido proceso de privatización. A cambio de ello, el FMI reactivó el “plan financiero 1984-1985” por un monto de 8 mil millones de dólares; 7,5 de los cuales, irían a parar al pago de la deuda externa y 0,5 a las reservas internacionales del BCRA; ninguno de ellos, a la producción o al trabajo (Boughton

⁴ Ver las conclusiones de la sentencia dictada por el juez Ballesteros el 13 de junio del 2000, en http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Ballesteros_JuicioSobreDeudaExterna/Ballesteros_001.htm, consultada el 01-09-10.

⁵ Escude-Cisneros (2000: capítulo 55: sección 1º: “antecedentes inmediatos”: 2).

(2001:394). Se suspendieron las investigaciones activadas en relación a la ilegitimidad de la deuda y se activó un nuevo proceso de estatización de las deudas privadas cerrando, de este modo, el ciclo iniciado durante los últimos años de la dictadura militar.

Pese al Acuerdo alcanzado, el programa económico naufragó y la situación del gobierno rápidamente se deterioró. A diferencia del de Brasil, el argentino criticaba la posición de los agentes centrales en relación a su gestión de la “crisis de la deuda externa”, pero al mismo tiempo pretendía alcanzar compromisos con el FMI en un momento (1987-1989) en el cual carecía de la capacidad política y económica para mantenerlos en el tiempo. El resultado de esta dinámica, fue un proceso de marchas y contramarchas, de pequeños avances y grandes retrocesos, que terminó con los acontecimientos hiperinflacionarios de 1989.

Ni bien asumió, el presidente Menem anunció la puesta en práctica de un proceso integral de reformas del Estado y solicitó el pronto envío de una misión del FMI a la Argentina. Se trató del inicio de un período en el que las relaciones entre el gobierno nacional y los BMD adquirieron un “carácter especial” a escala global. No debe pensarse, sin embargo, en término de una “alienación automática” en la que las autoridades del FMI proponían medidas económicas y las argentinas pasivamente las activaban, o viceversa. Tampoco, debe imaginarse que las relaciones entre ambas partes se consolidaron de un momento a otro, y de una vez y para siempre. De hecho, no fue sino hasta el año 1992 que se lograron progresos sustantivos en este sentido (“plan financiero 1992) y que, como bien explica Cavallo (2005:141), muchas de las medidas puestas en prácticas al principio del menemismo habían sido diseñadas en Argentina sin apoyo y, hasta en cierto grado, en oposición a las prescripciones del consenso de Washington.

Hasta tal punto esto es así, que en un principio el FMI fue renuente a respaldar el régimen de convertibilidad de 1991 (Takagi , 2004:29 y Mussa, 2002:5); régimen que se convertiría en el centro mismo del modelo económico de los 90. Fue necesario esperar a que éste estabilizara la economía, y hasta que el gobierno demostrase su capacidad política de llevar a cabo las profundas transformaciones anunciadas, para que nuestro país fuese autorizado a suscribir el Plan Brady de 1993 en virtud del cual se renegoció la deuda externa. A partir de entonces, la Argentina ingresó de lleno a la globalización financiera y una cantidad sin precedentes de capitales externos aterrizaron en nuestro país.

El acontecimiento que selló la relación entre el FMI y el gobierno nacional fue la “crisis tequila”. La decisión del equipo argentino de efectuar ajustes y profundizar las reformas iniciadas -en áreas particularmente sensibles para la población y en el marco de un año

electoral- recibió el aplauso de los operadores financieros internacionales. La relativamente pronta recuperación económica que nuestro país experimentó luego de la aludida crisis, fue entendida por los promotores del neoliberalismo como una prueba empírica de las bondades del nuevo modelo. Desde entonces, el FMI comenzó a apoyar expresamente el régimen de convertibilidad y a firmar Acuerdos financieros (vgr. 1996-1998) en un período en el cual, el gobierno tenía pleno acceso a los mercados voluntarios de créditos y, por lo tanto, no eran técnicamente necesarios (Takagi, 2004: 66).

Al finalizar la década, el presidente Menem fue elevado -en palabras del ex jefe del departamento de investigaciones del FMI, Mussa (2002:19)- a la categoría de “héroe” internacional y tuvo el privilegio único de ser invitado junto a Bill Clinton a las reuniones anuales del Fondo y el BM. El prestigio de estas instituciones quedó, así, profundamente ligado al éxito del régimen de convertibilidad; difundido ahora, bajo el nombre del “milagro argentino del decálogo de Washington”. El director del FMI, Michel Camdessus (Teunissen y Akkeman, 2003:26), calificó al modelo nacional como el mejor modelo económico del mundo Paradójicamente, esta calificación se producía en un momento en el cual ese mismo modelo comenzaba a dar fuertes signos de agotamiento.

3.2 La relación con el FMI durante el gobierno de la Alianza.

En el corto período que duró el mandato del presidente De La Rúa la relación con el FMI atravesó básicamente por tres etapas relativamente autónomas: una primera, que va desde octubre de 1999 a marzo del 2001, en la que hubo una coincidencia particularmente aceptada entre ambas partes mencionadas; una segunda, que comienza con el nombramiento de Cavallo (marzo del 2001) y finaliza con la activación del “corralito financiero” (diciembre del 2001), en la que existió una serie de roces entre el equipo nacional y el del FMI, pero en la que, pese a ello, este último continuó otorgando abultados recursos al país; y, una tercera, que supuso el quiebre definitivo y el abandono de las negociaciones en el momento inmediatamente anterior a la renuncia del presidente argentino (diciembre del 2001).

Entre 1998 y 2000, nuestro país sufrió una serie de *shocks* externos particularmente adversos, con consecuencias económicas desfavorables⁶. Al momento en que el gobierno de

⁶ Estos, de conformidad a Takagi (2004:35), fueron: a) una marcada reducción de los flujos de capital hacia los mercados emergentes después de las crisis de Asia oriental y Rusia de 1997-98; b) un correspondiente aumento de la aversión al riesgo por parte de los inversores internacionales; c) un *shock* en los términos de intercambio a causa de la caída de los precios relativos de los productos básicos que exportaba Argentina; d) la devaluación brasileña de principios de 1999 y la consiguiente pérdida de cuota del mercado en Brasil; e) una apreciación

la Alianza llegó al poder las principales fuentes de financiamiento de la convertibilidad se hallaban en serias dificultades. La tasa de crecimiento del PBI había caído desde el 8,11% al 3,85% y al -3,39% en 1997, 1998 y 1999, respectivamente. La balanza comercial que había sido positiva en 1.760 millones de dólares en 1996, fue en los dos años subsiguientes deficitaria por un monto de 2.123 y 3.117 millones. La deuda externa a 1999 representaba el 51,2% del PBI y ascendía a 145.430 millones⁷.. Los flujos de capitales con destino a los mercados emergentes se habían retraído y encarecido considerablemente. Mientras que hacia 1999 otras economías de la región, aún más afectadas que la nacional -vgr. Brasil-, habían comenzado a recuperarse la nuestra había permanecido en recesión durante dos años consecutivos (Takagi, 2004:69).

El nuevo ministro de economía, José Luis Machinea, al tomar posesión del cargo anunció que la situación fiscal estaba comprometiendo las posibilidades de respetar el cronograma de pagos de la deuda externa. Ante este panorama, explican Kulfas y Schorr (2003:44) “el ministro decidió encarar un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias...”. Se incluía también una reactivación del proceso privatizador y una profundización de las reformas estructurales, en especial en los ámbitos tributario y laboral. Bajo estos presupuestos el Consejo Ejecutivo del Fondo aprobó en marzo del 2000 un nuevo Acuerdo *stand-by* a 3 años que sustituía al precedente de 1998. El nuevo compromiso suponía un desembolso de 7.200 millones de dólares durante el período señalado con el objetivo de fortalecer la confianza de los inversores y facilitar una recuperación sostenible de la economía. Se creía que la recesión ya había tocado fondo y, con un entorno externo previsiblemente más favorable, se esperaba que el crecimiento del PIB en 2000 repuntara al 3,4%. Se preveía que las necesidades de financiamiento internacional, aunque cuantiosas, seguirían siendo manejables si se ejecutaba plenamente el programa (Takagi, 2004:69).

Pese a que éste se cumplió casi en su totalidad, la situación económica no mejoró; al contrario, empeoró. A mayo del 2000 los medios de comunicación difundieron los nuevos indicadores del INDEC. Las cifras del desempleo y subempleo, con un ligero aumento con respecto al mismo mes del año anterior, llegaron a niveles desconocidos en los últimos

secular del dólar estadounidense frente al euro que socavó la competitividad de Argentina en terceros mercados; f) un marcado aumento -175 puntos básicos- de la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos entre mediados de 1999 y mediados de 2000; g) una prolongada recesión en Argentina; h) un déficit de cuenta corriente estructural y en vías de empeorar.

⁷ Ver <http://www.fceco.uner.edu.ar/cpn/catedras/histssxx/indiceimages.htm>, consultada el 12-12-09.

tiempos (15,4% y 14,5% de la PEA, respectivamente). La pobreza y la indigencia también aumentaron y se produjo, por entonces, el primero de los 6 paros generales de los que el gobierno de De La Rúa sería objeto. El ajuste del gasto público, eje del Acuerdo alcanzado, se hacía en este contexto cada vez más difícil de ejecutar. La ley de flexibilización laboral requerida por el Fondo se sancionó en el marco de un profundo escándalo de corrupción que llevó a la renuncia del vicepresidente de la nación (06/10/00). A finales del año 2000, nuestro país perdió acceso definitivo al mercado financiero voluntario. Las autoridades solicitaron, consecuentemente, “ayuda excepcional” al FMI.

Desde la perspectiva de esta institución, explica Takagi (2004:69), existían dos diagnósticos posibles en relación a la prolongada recesión imperante. Una posibilidad era considerar este fenómeno como una “crisis de liquidez” resultante de *shocks* adversos pero temporarios. Según esta interpretación, el crecimiento podría reanudarse lentamente si se realizaban algunos ajustes de política que fortalecieran la confianza, sobre todo en el plano fiscal, y la adopción de medidas adecuadas para mejorar la competitividad. La otra posibilidad consistía en considerar que el régimen de convertibilidad se encontraba agotado y que la deuda externa era insustentable (Takagi, 2004:69).

La respuesta apropiada a la solicitud argentina dependía en forma crucial de cuál fuese el diagnóstico correcto (Takagi, 2004:69). Si el país estaba realmente confrontando una “crisis de liquidez”, se justificaba, por su efecto catalítico, un financiamiento cuantioso del FMI combinado con ciertos ajustes inmediatos y estructurales. Por otra parte, si existía un fuerte desajuste del tipo de cambio real o si la deuda era insostenible, el Fondo no debía proporcionar un acceso elevado a sus recursos sin exigir un cambio fundamental en la política económica, lo que posiblemente hubiese supuesto una devaluación, la reestructuración de la deuda o, más probablemente, ambas cosas.

El primer diagnóstico fue, claro está, el que terminó primando. La respuesta a la recesión debía contener los siguientes elementos: a) acordar con el equipo argentino un programa reforzado que hiciese hincapié en el crecimiento, la competitividad y la disciplina fiscal a mediano plazo; b) permitirles que compraran de inmediato el monto no girado en el marco del Acuerdo vigente; c) aumentar a más del doble los fondos del organismo, con lo que se elevó la cuota otorgada a unos 13.700 millones de dólares (Takagi, 2004:70).

Al mismo tiempo se inició un proceso de captación de divisas, que logró reunir una cifra de capitales inédita. El 18 de diciembre del 2000, Machinea anunció el “blindaje financiero” por un monto de 39.700 millones de dólares a ser desembolsados durante los dos años

subsiguientes (Kulfas y Schorr, 2003:45). En su momento los BMD leyeron este “blindaje” como un triunfo de sus esfuerzos para facilitar la participación del sector privado en la resolución de esta clase de crisis. Retrospectivamente, los resultados fueron menos alentadores. En efecto, el análisis de la Oficina Independiente de la institución (OEI) mostró que los acuerdos alcanzados “solo representaban compromisos frágiles” y que “las proyecciones de financiamiento para 2001, efectuadas en distintos momentos del año, suponían que los recursos provendrían desmesuradamente de acreedores internos (en gran medida cautivos) y no del sector privado internacional... -Takagi (2004:76)-”.

La estrategia confiaba en que las divisas acordadas devolviesen la confiabilidad al mercado argentino y que atrajesen nuevos capitales al país (“efecto catalítico”). En el núcleo del programa alcanzado se hallaba una profundización del ajuste fiscal: 5 de los 6 criterios de ejecución giraban en torno a esta cuestión. Se incluyeron parámetros para monitorear las finanzas de las provincias y se exigía que las autoridades revocaran por decreto las decisiones del Congreso que habían, por un lado, añadido partidas no aprobadas en el presupuesto de 2001 y, por otro, trabado la promulgación de las leyes de reforma de los sistemas de jubilación y obras sociales (Takagi, 2004:72-73). Al presentar su análisis sobre la situación, el personal técnico no señaló como problema fundamental ni la sobrevaluación del tipo de cambio ni la sustentabilidad de la deuda (Takagi, 2004:74).

La “prueba al mercado” falló. La fragilidad de los compromisos alcanzados en el marco del “blindaje financiero” tuvo consecuencias negativas inmediatas. Tras la crisis de Turquía de principios de febrero del 2001, las reservas del BCRA que -en enero habían alcanzado valores *records* (32.000 millones de dólares)- disminuyeron en más de 4.000 millones de dólares⁸. Machinea renunció a su cargo el 5 de marzo y su lugar fue ocupado por López Murphy. Frente al anuncio de su plan económico, que preveía recortar el gasto público (aún a costo de efectuar rebajas presupuestarias en sectores políticos tan sensibles como el de la asistencia social, la salud y la educación) por un monto de 1.962 millones de dólares en 2001 y por uno de 2.485 millones para el año siguiente⁹, abandonaron el gobierno varios funcionarios de peso del FREPASO. Frente a la presión, López Murphy dimitió a los 16 días de haber jurado el cargo.

⁸ Ver Pozzo (2008) y las páginas *web*

<http://www.fmmeduccion.com.ar/Historia/Cacerolazos/000cacerolazos.htm> y

<http://www.globalizacion.org/crisispolitica/argentina/ArgentinaCronologiaCrisis.htm>, consultadas el 10-04-10.

⁹ Ver “día 16 de marzo del 2001”

<http://www.globalizacion.org/crisispolitica/argentina/ArgentinaCronologiaCrisis.htm>, consultada el 10-04-10.

Esto, explica el jefe del departamento de investigaciones del FMI, Mussa (2002:37), fue un duro golpe para el programa diseñado, porque daba la impresión de que el sistema político argentino era incapaz de apoyar ni siquiera un programa de ajuste fiscal -según sus palabras- “relativamente moderado”. Los memorandos internos del personal técnico del FMI planteaban la preocupación sobre la viabilidad del modelo. En una nota a la gerencia de marzo de 2001, este personal indicaba que la sociedad argentina estaba mostrando señales de fatiga a los ajustes. En otra, incluso más explícita, de finales de abril, el grupo de trabajo comunicó que había aumentado el riesgo de una crisis total en nuestro país y que parecía improbable que se pudiese evitar ese desenlace, pero no imposible. A principios de mayo, los contactos de dicho personal con los principales bancos de inversión de Nueva York, revelaron que los participantes del mercado eran escépticos con respecto a los planes de política delineados (Takagi, 2004:85).

La llegada de Cavallo a la cartera económica marcó dos grandes modificaciones en relación a la manera en la cual la elite gobernante argentina había gestionado hasta entonces la crisis imperante. En primer lugar, y al igual que sucedió a principios de los 90, el super-ministro entendió que el agente inmediato al cual nuestro país debía dirigir la atención a fin de salir del círculo vicioso en el cual se encontraba inserto se hallaba en los EEUU y ya no, de manera directa, en el FMI. Obtenido el apoyo de las autoridades del país del norte -creía- el segundo actuaría en consecuencia. En segundo lugar, Cavallo reconocía que la disciplina fiscal del gobierno nacional y de los provinciales era un factor influyente pero no la causa principal de la problemática argentina. En el centro de esta problemática se ubicaba, y en orden decreciente de importancia, el peso de la deuda externa en el PBI y la inviabilidad del régimen de convertibilidad en el marco del nuevo escenario económico internacional (Cavallo, 2005).

Bajo estos presupuestos, el super-ministro anunció un nuevo paquete de medidas sin consulta previa con la institución (entre las que se incluía el reemplazo de la paridad cambiaria vigente desde 1991 a “1 peso igual a 1 dólar”) e inició inmediatas negociaciones con el nuevo secretario del tesoro estadounidense, Paul O’Neill (20-01-2001 al 31-12-2002). Después de una serie de vacilaciones, O’Neill “dijo que estaría dispuesto a apoyar un paquete adicional del FMI para Argentina, pero sólo si éste incluía un proceso de reestructuración ordenado de la deuda que bajase significativamente los costos de intereses del sector público. Acepté, dice Cavallo (2005:146), su posición e inmediatamente empecé a trabajar con el FMI...”

Pese a que las metas fiscales acordadas para el 1° trimestre del 2001 se habían incumplido por amplios márgenes, el Directorio Ejecutivo de la institución aprobó el 21 de mayo la recomendación de la gerencia de concluir exitosamente la 3° revisión al Acuerdo de marzo del 2000, lo cual permitió desembolsar el tramo de 1.200 millones de dólares previsto (Takagi, 2004:83). El programa económico fue revisado en concordancia con las medidas anunciadas por el equipo nacional. El nuevo compromiso constaba de tres pilares: a) encarrilar el ajuste fiscal, en particular mediante la creación de un impuesto a las transacciones financieras de alto rendimiento (de modo que se pudiesen cumplir las metas originales para el final del año); b) impulsar la competitividad, fundamentalmente, a través de planes de competitividad; c) realizar un “megacanje”, voluntario y en condiciones de mercado, de bonos del Estado para reducir las necesidades de financiamiento a corto plazo del gobierno federal (Takagi, 2004:84-86).

El día 24 de mayo el gobierno ofreció a los inversores canjear sus bonos “Brady FRB”, “Bocones”, “eurobonos” y “Bontes” por nuevos títulos globales con vencimiento en 2006, 2008, 2018 y 2031. Poco después, el 3 de junio, Argentina anunció el rescate de dichos bonos por un valor de 29.477 millones de dólares a cambio de los cuales se emitieron títulos pagaderos en los años señalados¹⁰. A pesar que este proceso supuso un alivio en el cronograma de vencimientos, el riesgo país y la fuga de capitales siguieron aumentando. El gobierno decidió profundizar el ajuste. El 30 de julio el congreso aprobó la ley de “déficit cero” N° 25.453 que, entre otras cuestiones, suponía un recorte del 13% sobre salarios, pensiones y jubilaciones mayores a los 500 dólares. Se trató de una medida extrema, tendiente a mostrar su férrea voluntad de cumplir con las condiciones impuestas por el FMI sin importar los costos sociales y políticos que de ellos pudiesen llegar a desprenderse.

En base a dicha ley, el Fondo finalizó la 4° revisión al Acuerdo aludido y aprobó el 2° rescate más importante de su historia. Desembolsaría 8 mil millones de dólares y 3 mil más si se lograba el pacto fiscal con las provincias. La decisión en el seno de la institución fue particularmente difícil. Tan sólo en agosto se realizaron no menos de 6 reuniones informales del Directorio para tratar el tema de Argentina, sin contar las reuniones diarias de la gerencia y los altos funcionarios, y los contactos regulares con los Tesoros y ministerios de hacienda de los principales gobiernos accionistas. Tras ciertos titubeos iniciales, el 21 de ese

¹⁰ Ver “03 de junio del 2001” <http://www.globalizacion.org/crisispolitica/argentina/ArgentinaCronologiaCrisis.htm>, consultada el 10-04-10-

mes, el director gerente recomendó al Directorio que aprobase el paquete de 8.000 millones de dólares y comunicó a la prensa su decisión. El informe del personal técnico del FMI fue inusualmente franco en su descripción de los riesgos del programa. Señaló la posibilidad de una fuerte resistencia política a sus componentes fundamentales, la vulnerabilidad del sector bancario a nuevas corridas de depósitos, el deterioro de varios indicadores de vulnerabilidad externa y el hecho de que las autoridades solo contaban con unos pocos meses para restablecer la credibilidad que se requería para poder suplir sus enormes necesidades de financiamiento para el año siguiente. Concluía, no obstante ello, que el programa merecía el apoyo del FMI (Takagi, 2004:91-92).

Para fines de octubre, era obvio que el aumento de fondos no había logrado producir el esperado círculo virtuoso. La economía argentina siguió deteriorándose en casi todos los sentidos. El riesgo país se encontraba en cifras cercanas a los 2.000 puntos y los capitales financieros seguían con su precipitado éxodo. El 14 de octubre el oficialismo perdió la mayoría legislativa. El mes de noviembre se inició con un nuevo intento de reestructuración de la deuda externa. Esta vez el proceso se dividió en dos fases: una primera, dirigida fundamentalmente a los acreedores internos y, una segunda, a los internacionales. El riesgo país superó los 2.500 puntos. El día 7 los gobernadores peronistas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se negaron a suscribir el pacto fiscal. Siete días después, y luego de arduas negociaciones, adhirieron al mismo.

A fines de noviembre se produjo una nueva corrida bancaria en la que en 3 días se perdieron más de 3.600 millones de dólares en depósitos, llevando a 15.000 millones la disminución acumulada desde el comienzo del año (es decir, se habían evaporado en ese lapso el 20% de los depósitos totales del sistema). En ese escenario llegó a Buenos Aires una nueva misión del FMI que tenía por objeto concluir la 5ª revisión del programa. Durante esas negociaciones, se hizo evidente que la evaluación del equipo técnico difería considerablemente de la de las autoridades en cuanto a las perspectivas de alcanzar las metas fiscales (Takagi, 2004:101).

El 1º de diciembre, el gobierno presentó el decreto 1.570/01 que restringía la extracción de divisas del sistema bancario a un monto de 250 dólares por día (vgr. “el corralito”). Cuatro días después, y luego de que Cavallo declarase que las negociaciones con el Fondo “iban bien”, esta institución emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que la misión regresaba ese mismo día a Washington y que no se desembolsaría el tramo programado de 1.300 millones de dólares. Simultáneamente, la gerencia informaba al Directorio que no

podía recomendarse la conclusión de la 5ª revisión porque la meta del déficit fiscal fijada para el 2001 se excedería en demasía y las proyecciones para el año siguiente mostraban una gran brecha de financiamiento. Según los apuntes informales de la reunión, los directores enfatizaron que el FMI no debía abandonar a Argentina (Takagi, 2004:101). No obstante ello, la decisión recaía sobre el Director Gerente, y él así lo hizo.

Cavallo (2005:147) viajó por 2º vez en menos de 20 días a Washington y se reunió con el equipo del FMI para destrabar la situación sin resultados positivos. A la media noche del 19 de diciembre se conoció su renuncia y poco después la del presidente De La Rúa. El riesgo país superó la barrera de los 5.000 puntos. El 23 de ese mismo mes, en su discurso de asunción, Rodríguez Saá anunció la interrupción del pago de la deuda. Ocho días después, Duhalde advirtió que dicha suspensión sólo incluía a la deuda en bonos no canjeados lo que equivalía a decir que el Estado asumiría sus compromisos financieros con los BMD, incluido el FMI (Kulfas y Schorr, 2003:49).

4. Críticas a la gestión del FMI de la crisis del 2001.

Al igual que sucediese en los años 80 el Fondo interpretó la situación imperante en Argentina de finales de la década de los 90 en términos de una “crisis de liquidez” y no de una de “carácter estructural”. No advirtió de la insustentabilidad de la deuda externa ni del régimen de convertibilidad. Sus programas y los miles de millones de dólares que acordó con el país no se utilizaron consecuentemente para efectuar quitas a la deuda (los dos canjes realizados fueron diseñados sin participación del FMI y tuvieron carácter “voluntario”) o para devaluar la moneda de manera ordenada y respaldada. Menos aún para reactivar la industria o ayudar a los millones de necesitados. Antes bien, sus divisas se usaron para financiar un régimen que, bajo las condiciones imperantes, exacerbaba la valoración financiera, las ganancias extraordinarias de los grandes capitales, la fuga de divisas y, finalmente, para aumentar considerablemente los pasivos del Estado con los BMD.

Un cuidadoso análisis del informe de la OEI del año 2004 nos permite presentar una serie de graves inconsistencia en la manera en la cual el FMI gestionó la crisis del 2001 en la Argentina. Entre ellas destacamos las siguientes:

4.1- *Impericias al momento de realizar el diagnóstico:* la OEI advirtió que el Fondo no recurrió a los instrumentos analíticos que tenía disponible para evaluar la sustentabilidad del tipo de cambio y de la deuda (Takagi, 2004:119-120). La planificación para contingencias fue inadecuada. La institución se mostró excesivamente renuente a presionar para que se

modificara el régimen cambiario existente. El Fondo no asimiló oportunamente la enseñanza dejada por las crisis de Asia oriental, Rusia y Brasil, a saber: que en estos casos el enfoque catalítico sólo funciona después de que se ha abandonado el régimen cambiario fijo.

4.2- *Desconocimiento del riesgo financiero*: para enero de 2001, dice el informe de la OEI, el FMI había incrementado su exposición a niveles que obviamente ponían en duda la capacidad de pago del país (Takagi, 2004:109). No obstante ello, continuó comprometiendo recursos adicionales sin tener en cuenta el riesgo financiero que estaba asumiendo. Hasta cierto punto, la concentración de esta clase de riesgo es inevitable en una situación de crisis. Aún así, concluye el informe, no se prestó dentro de la institución suficiente atención al mismo.

4.3- *El doble juego con Cavallo*: la OEI presentó un cuadro en donde enumeró 9 medidas económicas centrales que el super-ministro anunció o adoptó entre marzo y diciembre del 2001 sin consulta previa con el FMI (Takagi, 2004:108).. La manera de conducirse del super-ministro exacerbó los ánimos de los funcionarios de la institución. Todos los involucrados criticaron hondamente la actitud de Cavallo. Mussa (2002:42 y ss), por ejemplo, lo presenta lisa y llanamente como un “déspota”. Señala que no discutía sus decisiones ni siquiera con otros miembros del gobierno y que anunciaba a la prensa acuerdos con el FMI que no habían sido de hecho alcanzados. Una visión semejante es exhibida por el ex jefe del departamento de economía del BM, Edwards (2002), al momento de comentar los debates que por entonces se realizaban en torno a la convertibilidad.

La paradoja es que a excepción de la última medida señalada (vgr. corralito), las anteriores fueron respaldadas o al menos no derogadas por la institución. Más aún, todas las revisiones al programa *stand by* vigente que se aprobaron en el período señalado -y que brevemente describimos en la reconstrucción histórica realizada- se construyeron en torno a las medidas que Cavallo anunciaba o tomaba sin consulta previa con el Fondo.

4.4- *La insustentabilidad de la estrategia diseñada*: íntimamente ligado al primer punto. El FMI, explica el informe de la OEI, respaldado por sus principales accionistas, también falló al no solicitar oportunamente que se dejara de respaldar una estrategia que, tal como se estaba implementando, era insostenible (Takagi, 2004:113). A medida que se profundizaba la crisis, el FMI no logró convencer a las autoridades de elaborar una estrategia alternativa que ayudara a mitigar los costos últimos de la crisis, aunque inevitablemente estos costos habrían sido altos.

Básicamente el aludido informe advierte que las razones que justificaron la conclusión de las últimas cuatro revisiones del programa son muy difíciles de explicar de acuerdo a la propia lógica de la institución. Por ejemplo, el paquete de rescate de agosto (el de 8 mil millones de dólares, “4° revisión”) se aprobó aún cuando su propio director gerente estimaba que las probabilidades de éxito del programa eran a lo sumo de un 20% o 30% (Takagi, 2004:94). En esta circunstancia el Directorio tampoco desempeñó activamente su función de supervisor de los recursos del FMI. El informe del personal técnico dejó en claro que, según varios indicadores, el desembolso del tramo de 5 mil millones de dólares haría de la exposición crediticia del Fondo frente a Argentina una de las más arriesgadas de su historia (Takagi, 2004:99).

4.5- Las revisiones al Acuerdo aprobadas durante la gestión de la crisis del 2001 *poseían hacia su interior medidas que, desde la propia óptica del FMI, eran incompatibles entre sí o con su finalidad propuesta*: por ejemplo, el informe de la OEI señala que el diseño del programa aprobado en la 2° revisión partía de supuestos excesivamente optimista y presentaba las siguientes deficiencias (Takagi, 2004:78): 1) en el análisis de sensibilidad no se examinaba la sustentabilidad de la deuda ni del tipo de cambio; 2) incluso de materializarse los supuestos previstos, Argentina necesitaba generar un superávit en cuenta corriente, excluidos los intereses, de un 0,5% del PIB en 2001 para poder estabilizar la relación deuda externa/PIB por encima del 50% del PIB. Ello era incompatible con el cuantioso déficit proyectado en cuenta corriente; 3) en la práctica el diseño del programa equivalía a aplicar una política fiscal a corto plazo más expansiva y, al mismo tiempo, afirmar el compromiso con la disciplina fiscal en el mediano plazo. El supuesto implícito de que el diseño fiscal del programa bastaría para restablecer la confianza era sumamente cuestionable.

5. Conclusiones.

Sintetizando las críticas expuestas en el acápite precedente, puede advertirse que el Fondo no recurrió a los instrumentos analíticos que tenía disponible para evaluar la sustentabilidad del tipo de cambio y de la deuda, no efectuó una planificación adecuada para contingencias, se mostró excesivamente renuente a presionar para que se modificara el régimen de convertibilidad, no asimiló oportunamente la enseñanza dejada por las crisis de 1997-1998 en relación al enfoque catalítico, incrementó su exposición a niveles que ponían en duda la

capacidad de pago del país, continuó comprometiendo recursos sin tener en cuenta el riesgo financiero que estaba asumiendo, aprobó las revisiones al programa *stand by* en base a las medidas que Cavallo anunciaba o tomaba sin su consulta previa, falló al no solicitar oportunamente que se dejara de respaldar una estrategia que -tal como se estaba implementando- era insostenible, concluyó las últimas revisiones arguyendo razones que son muy difíciles de justificar y, finalmente, activó programas que poseían hacia su interior medidas que eran incompatibles entre sí o con la finalidad propuesta. Se trata de un conjunto de prácticas que, *en definitiva*, no encuentran fundamento a la luz de la lógica habitual de la institución y que en algunos casos llegaron a traspasar sus propias normas (Takagi, 2004:119).

Pese a ello, el FMI no sólo no se corresponsabilizó de lo sucedido sino que, por el contrario, endureció su posición y demandas con respecto a nuestro país. En un nuevo giro hacia el neoconservadurismo (vgr. administración Bush) entendió que su principal error en Argentina fue el de no haber sido lo suficientemente riguroso con el déficit fiscal ni con la exigencia de mayores transformaciones estatales de corte neoliberal -Mussa (2002:4) y Krueger (2002:6)-. Este nuevo giro tuvo importantes consecuencias en el curso de los acontecimientos ex-post *default* y se manifestó, al menos, en los siguientes presupuestos: a) no se otorgaría más financiamiento hasta que el gobierno nacional no tomase las medidas “necesarias” para volver al crecimiento; b) se exigiría el pago del monto y de los intereses adeudados a los acreedores externos en tiempo y forma. Al decir del nuevo ministro de economía, Roberto Lavagna, el FMI dejaba de jugar el papel de prestamista de última instancia para asumir uno, muy distinto, el “de cobrador de primera instancia” (Damill, Frenkell y Rapetti, 2005:30); y c) se defenderían con uñas y dientes los intereses económicos de los grandes capitales foráneos en la Argentina. Bajo estos presupuestos, la relación entre las autoridades nacionales y las del FMI ingresaron a una nueva etapa de confrontaciones; etapa que continúa hasta nuestros días.

Bibliografía.

Boughton, J.M. (2001) *Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979-1989*, International Monetary Fund, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/history/2001/index.htm>, [01-09-10].

Cavallo, D. (2005) "Argentina and the IMF During the Two Bush Administration", *International Finance* 7:1, pp. 137-150, <http://www.cavallo.com.ar/wp-content/uploads/Argentina.pdf>, [01-09-10].

Committee on Financial Services, (2002) Hearings before the Subcommittee on International Monetary Policy and Trade of the Committee on Financial Services U.S. House Of Representatives, Argentina's Economic Meltdown: Causes And Remedies", <Http://Financialservices.House.Gov/Media/Pdf/107-52.Pdf>, consultada el 01-09-10

Damill, M.; Frenkel, M. y Rapetti, M. (2005). *La Deuda Argentina: Historia, Default y Reestructuración*, CEDES, http://www.gsb.columbia.edu/ipd//pub/Frenkel_Debt_English.pdf, [01-09-10]

Edwards, S.(2002). *The Great Exchange Rate Debate after Argentina*. http://www.oenb.at/en/img/wp74_tcm16-6164.pdf. [01-09-10].

Escude, C. y Cisneros, A (Dir) (2000) *Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina*, Tomo XI: "Relaciones Económicas Externas de la Argentina, 1943-1989", Bs As, http://www.argentina-rree.com/historia_indice00.htm [12-12-09].

Feldstein, M.(2002), "Argentina's Fall: Lessons from the Lastest Financial Crisis", *Foreign Affairs*, Vol. 81 Num. 2. http://www.sais-jhu.edu/bin/q/z/ Feldstein_ArgentinaCrisis_ForeignAffaires2002.pdf, [01-09-10].

Frenkel, R. (2003) "Globalización y Crisis Financieras en América Latina", *Revista de Economía Política*, vol. 23, nº 3 (91. <http://www.rep.org.br/pdf/91-5.pdf>. [01-09-10].

Harvey, D. (2007), *Breve Historia del Neoliberalismo*, Ed. Akal, Madrid.

Heydebrand, W. (2003), "The Time Dimension on Marxian Social Theory", *12 Time and Society*, 2/3, pp. 88-147.

Krueger, A. (2002), "Crisis Prevention and Resolution: Lessons from Argentina", Conference on "The Argentina Crisis" Cambridge July 17. <Http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docolec/nber/books/Arg/krueger.pdf>, [01-09-10].

Kulfas, M. y Schorr, M. (2003). *La Deuda Externa Argentina: Diagnóstico y lineamientos propositivos para su reestructuración*, Fundación OSDE-Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP).
[Http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/240_AEYT_La.deuda.externa.argentina.pdf](http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/240_AEYT_La.deuda.externa.argentina.pdf), [01-09-10].

Mussa, M. (2002) *Argentina and the Fund: From Triumph to Tragedy*. Peterson Institute for International Economics, <http://bookstore.piie.com/book-store//343.html>, [01-09-10]

Pozzo, H. D. (2001) *Argentina Default 2001*. <http://www.latinforme.com/reportes/argentinadefault2001-HoracioPozzo.pdf>. [01-06-10].

Rodriguez, Jesús, (2004) *El Papel del Fondo Monetario Internacional en la crisis de la Argentina*. [Http://www.wilsoncenter.org/topics.doc](http://www.wilsoncenter.org/topics.doc) , [01-09-10].

Stiglitz, J. (2002) *Argentina, short-changed: Why the nation that followed the rules fell to pieces*. [Http://www.yorku.ca/robarts/archives/institute/2002/stiglitz_argentina.pdf](http://www.yorku.ca/robarts/archives/institute/2002/stiglitz_argentina.pdf), [01-09-10].

Takagi, S. y otros (2004). *Informe sobre la evaluación del Papel del FMI en Argentina, 1991–2001*, Oficina de Evaluación Independiente del FMI, <http://www.ieo-imf.org/eval/complete/pdf/07292004/espanol.pdf>, [01-09-10].

Teunissen, J. J. y Akkerman, A. (2003) *The Crisis That Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation*. FONDAD Organization, [http://www.fondad.org/uploaded/ Argentina/Fondad-Argentina_Contents.pdf](http://www.fondad.org/uploaded/Argentina/Fondad-Argentina_Contents.pdf), [01-09-10].